

CONTRALORÍA DETERMINARÁ SI HUBO SOBRECOSTOS

Tanto la Alcaldía, como la Gobernación defendieron sus procesos de contratación, luego de que la Contraloría General de la República iniciara indagación preliminar en cuatro contratos (dos de cada entidad).

La razón del procedimiento obedece a presuntos sobrecostos.

En los contratos celebrados por la administración del alcalde Jairo Yáñez, explica la entidad fiscalizadora, los sobrecostos alcanzarían hasta un 27 %.

Uno de los contratos investigados es el que celebró la Alcaldía con la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito (Cooguasimales), por valor de \$1.687 millones, para el suministro 15.000 kits de alimentos.

Este contratista es representado legalmente por Mariela Arévalo Álvarez. La Cooperativa ha tenido contratos en las pasadas administraciones municipales.

Huber Plaza Villamizar, jefe de la Secretaría de Gestión del Riego de Desastres del municipio, dependencia que adelantó esta contratación, explicó que el trámite se adelantó bajo todos los estándares permitidos por la ley.

Manifestó que luego de conocer la necesidad, se enviaron solicitudes de cotizaciones a diferentes empresas y una vez determinado el valor de la compra, procedió a efectuarse la invitación a los oferentes. Y agregó que Cooguasimales envió la propuesta económica y los sopor-tes que acreditaban su idoneidad para la ejecución de la orden de proveeduría.

Sobre la razón de contratar a esta empresa para adelantar dicha labor si ese no es el objeto de su razón social, Plaza Villamizar dijo que “conforme al objeto social registrado en la Cámara de Comercio (...) dentro de las actividades económi-

## Alcaldía y Gobernación defienden sus procesos de contratación



EL CONTRATO PARA LA ENTREGA DE 15.000 MERCADOS por parte de la Alcaldía de Cúcuta, es uno de los que está en la mira de la Contraloría General de la República.

cas está la 64631 que corresponde al comercio al por mayor de productos alimenticios”.

El funcionario también dijo no conocía que la empresa es de la familia política del alcalde de Cúcuta.

“Conocimos de la empresa porque al igual que otros proveedores han ido a la Secretaría de Gestión del Riesgo a ofrecer sus servicios y el proceso de selección se cumplió luego de haber hecho la invitación a cuatro empresas más, y

conforme a precios y disponibilidad de productos se tomó la decisión de hacer la proveeduría con ellos”, explicó.

Y agregó que: “todas nuestras actuaciones se han hecho apegadas a la ley y siguiendo el principio de transparencia promulgado por nuestro alcalde”.

El otro contrato que entró en el radar de la Contraloría es el que llevó a la suspensión de la secretaria de Salud del municipio, María Constanza Arteaga, por parte de la Perso-

nería. Se trata del correspondiente a Soluciones y Proveedurías SAS, por \$1.081 millones, para el suministro de insumos biomédicos y logísticos para la prevención, atención y contención de la COVID-19, en el marco de la emergencia sanitaria.

En su momento, quien estaba a cargo de la dependencia municipal, aseguró que no se había incurrido en ningún sobrecosto.

Dentro de esa contratación se cuestionaban el valor el litro de jabón antibacterial que fue de

\$46.218 y un contenedor de residuos sólidos biológicos peligrosos por un costo la unidad de \$525.000. Sin embargo, la explicación es que dicho precios aceptados se podían verificar en el mercado y que estaban acordes al presupuesto.

Ahora será la Contraloría quien defina, finalmente, si hubo o no sobrepresos.

En los contratos de la Gobernación, uno tiene relación al firmado con la Unión Temporal Multipae 2020, por un valor de \$5.956 millones, para el suministro de alimentación, bajo la modalidad de ración preparada en casa.

La Contraloría dice que tiene indicios de que se presentan sobrecostos entre el 1% y el 14 %.

Con quienes conforman esta Unión Temporal, ya la Gobernación había tenido vínculos. La Unión Temporal Nutrinorte, quien manejó el PAE en 2019, comparte socios con esta nueva Unión Temporal. Además, según se describe en la información proporcionada a la Contraloría, la mayoría de sus contratos los ha desarrollado en Santander.

Según se detalla en el Secop la contratación se hizo bajo la modalidad de contratación directa y con los estándares permitidos dentro del decreto de Urgencia Manifiesta.

Del otro contrato, firmado con la Comercializadora Internacional de Productos Colombianos C.I. PROCOL S.A.S. para el suministro de kits alimentarios, se presumen sobrecostos por el orden del 8% que ascienden a \$ 162'867.250.

Para esta contratación la Gobernación tuvo en cuenta tres cotizaciones más, decantándose la de PROCOL S.A.S., que aunque según la Contraloría fue la de menor precio global, al final se advierte un posible sobrecosto.

## ¡Histórico!, Colombia aprobó cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños

Bogotá (AFP Y COLPRENSA)

El Congreso de Colombia aprobó ayer una reforma a la Constitución para imponer la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 14 años.

Con 77 votos a favor y ninguno en contra, el Senado, con el respaldo del gobierno de Iván Duque, dio luz verde al cambio del artículo 34 del texto constitucional que prohibía “las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”.

“De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”, señala la reforma aprobada.

La iniciativa ya había sido aceptada por la Cámara de Representantes y deberá ser promulgada por Duque en los próximos días.

Hasta ahora la pena máxima en Colombia era de 60 años de cárcel.

La decisión del parlamento salda un debate de más de una década en este país de fuerte tradición conservadora.

En el poder desde agosto de 2018, Duque asumió esa causa como bandera de campaña e impulsó su discusión en el Congreso.

“Hoy Colombia tiene un gran motivo de felicidad. Hoy el Congreso de la república ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros”, dijo el mandatario en un programa habitual de televisión.

Duque destacó que confía en que las agresiones a menores sean siempre delitos “imprescriptibles para que en cualquier momento, quien haya cometido ese delito, tenga esa sanción ejemplarizante”.

En Colombia casi dos menores de edad son asesinados al día. Según la autoridad forense, en 2019, más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.

Durante extensos debates, los defensores del proyecto argumentaron que los agresores de menores tienden a recaer en la comisión del delito y la cadena perpetua es una forma de disuadirlos. Además, dijeron que las agresiones contra niños han aumentado en los últimos años y las penas vigentes, aunque eran altas, no siempre se pagaban en su totalidad.

Por su parte, los destructores, entre los que están congresistas de la oposición, académicos y expertos aseguraron que un incremento punitivo no es eficaz en la reducción de las agresiones. Según ellos, era mejor invertir en investigación criminal, para reducir la impunidad.

### EL CAMINO PARA SER REFORMA CONSTITUCIONAL

Según los cálculos de los expertos, desde 1991 se ha intentado por lo menos 18 veces reformar la Constitución para imponer la cadena perpetua a los violadores y abusadores de niños.

En 2009, incluso, se intentó promover un referendo para cambiar la Constitución en este sentido, y aunque fue aprobado por el

Congreso, la Corte Constitucional lo declaró inexecutable por vicios de forma en su convocatoria.

La fallecida concejal de Bogotá Gilma Jiménez fue la principal impulsora de la iniciativa, que no alcanzó a ver materializada. Esta bandera la heredó su hija, Yohana Jiménez, quien impulsó un nuevo referendo, pero no logró recoger las firmas suficientes para llevar este mecanismo de participación ciudadana a la Registraduría.

En esta ocasión, tal vez la que ha estado más cerca el proyecto de convertirse efectivamente en una reforma constitucional, el factor principal de éxito fue el respaldo del presidente Duque.

Fue una promesa de campaña del mandatario, que al llegar al poder se reafirmó en su propósito.

“No puede ser que en nuestro país, según los reportes que muestran distintas instituciones, incluida Medicina Legal, aparezca que los niños están cada vez más expuestos a violaciones o abusos en sus propios entornos familiares”, manifestó Duque para justificar su propuesta.

El apoyo del Gobierno le garantizó un tránsito relativamente cómodo a la iniciativa en el Congreso. Aunque tuvo que enfrentarse a recusaciones y trabas de procedimiento, finalmente el proyecto fue aprobado en último debate por una mayoría bastante holgada.

Sin embargo, ese podría no ser el último escollo que debe superar esta reforma. Algunos expertos en derecho constitucional consideran que no es probable



LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FUE REFORMADA en su artículo 34 para permitir la prisión perpetua a asesinos y violadores de menores. El Gobierno del presidente Iván Duque tiene un año para reglamentar su aplicación.

que obtenga el respaldo de la Corte Constitucional.

En su libro ‘Consideraciones sobre la inviabilidad de la prisión perpetua en Colombia’, el grupo de investigadoras de la Universidad Externado de Colombia, Angélica María Pardo, Ana Lucía Moncayo y Ángela Marcela Olarte Delgado, afirman que “No es posible reformar la Constitución en el sentido de permitir que en Colombia exista la prisión perpetua, pues una medida semejante no implicaría una reforma, sino una sustitución de la Constitución”.

Aunque, de acuerdo con la Constitución, la Corte solo puede declarar inexecutable las reformas constitucionales por vicios de forma, la tesis de las investigadoras es que la prohibición de la prisión perpetua está tan arraigada en la carta política que eliminarla sería modificar la esencia misma de la Constitución.

A esto se suman las críticas que desde distintos sectores jurídicos se le han hecho a la medida, pues amenaza con congestionar aún más un sistema carcelario que ya de por sí tiene un hacinamiento altísimo.

De hecho, el consejo asesor de política criminal le

había manifestado su oposición al Gobierno, opinión que, por no ser obligatoria, no fue adoptada por la ministra de

Justicia, Margarita Cabello.

La última palabra, en todo caso, la tendrá la Corte Constitucional.

**AGUA DE LOS PATIOS S.A. E.S.P**  
Surtiendo Amigos!  
NIT. 900.163.757-0

AGUA DE LOS PATIOS SE PERMITE PONER EN CONOCIMIENTO A SUS USUARIOS LA RESOLUCIÓN CRA 915 DE 2020 "Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19", modificada por la Resolución CRA 918 del 6 de mayo de 2020.

CONDICIONES DE SELECCIÓN DEL PAGO DIFERIDO	
ESTRATOS	VALORES SUJETOS DE PAGO DIFERIDO Y APLICACIÓN DE LA OPCIÓN DE PAGO DIFERIDO
1, 2, 3 y 4	Para los suscriptores y/o usuarios residenciales de los estratos 1 al 4, el valor sujeto a pago diferido será el de la factura (cargo fijo y cargo por consumo para los servicios de acueducto y alcantarillado) por suscriptor y/o usuario asociado a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado.
5 y 6	Para los suscriptores y/o usuarios de los estratos 5 y 6, y suscriptores y/o usuarios industriales, comerciales y oficiales, que acuerden con las personas prestadoras el pago diferido, el valor sujeto a pago diferido será el de la factura (cargo fijo y cargo por consumo para los servicios de acueducto y alcantarillado) por suscriptor y/o usuario asociado a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, sin incluir los aportes solidarios.
ESTRATOS	FACTURAS OBJETO DE PAGO DIFERIDO
1, 2, 3, 4, 5 y 6	Se incluyen dentro de esta medida transitoria las facturas emitidas durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como las facturas de los suscriptores y/o usuarios de los estratos 1 al 6, industriales, comerciales y oficiales, correspondientes a los consumos causados durante los 90 días siguientes a la declaración de dicha emergencia.
1, 2, 3, 4, 5 y 6	La dispuesta en este artículo corresponderá, en el caso de periodos de facturación mensual a un total de tres (3) facturas a diferir.
5 y 6, Suscriptores y/o usuarios industriales, comerciales y oficiales	Para efectos de la presente resolución se entiende por factura emitida la que se expida dentro del término de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.
En caso de incumplimiento del pago diferido, una vez superada la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, o aquella que la modifique, adicione y/o sustituya, la persona prestadora podrá reiniciar las acciones de suspensión o corte del servicio público en los plazos establecidos en el párrafo 1 del artículo 3 de la Resolución CRA 911 de 2020 y dar aplicación a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 142 de 1994.	

TASA DE FINANCIACIÓN APLICABLE	
ESTRATOS	TASA DE FINANCIACIÓN
1 y 2	Se aplicará TASA 0%
3 y 4	Se aplicará TASA 6%
5 y 6, Suscriptores y/o usuarios industriales, comerciales y oficiales	Se aplicará TASA 6%

PERÍODO DE PAGO	
ESTRATOS	Periodos de pago
1 y 2	treinta y seis (36) meses.
3 y 4	veinticuatro (24) meses.
5 y 6, Suscriptores y/o usuarios industriales, comerciales y oficiales	acordado entre las partes.

FECHA DE INICIO DE PAGO

PERÍODO DE GRACIA

Las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo deberán ofrecer a los suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 1 al 4 un periodo de gracia, para que el primer pago del valor sujeto a pago diferido se refleje a partir de la FACTURA EXPEDIDA EN EL MES DE JULIO DE 2020. Las personas prestadoras podrán incluir los intereses ocasionados durante el periodo de gracia en las cuotas a pagar por la financiación de las facturas de conformidad con la tasa a aplicar referida.

OPCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

PAGO ANTICIPADO

Los suscriptores y/o usuarios que se acogen a la medida de pago diferido prevista en la presente resolución podrán cancelar en cualquier momento el saldo total a pagar de cada factura, sin aplicación de sanciones por parte de la persona prestadora.